

Documento N° 6

Serie: Contextos
subregionales

Conflicto y violencia en el sur del Cesar: de la conflictividad agraria al crimen organizado

Reynell Badillo

Conflicto y violencia en el sur del Cesar: de la conflictividad agraria al crimen organizado.

Reynell Badillo*

Abril de 2018

Índice

1. Introducción	2
1.1. Antecedentes del conflicto armado: la violencia prevalente	3
1.2. La violencia guerrillera	5
1.3. La irrupción del paramilitarismo	7
1.4. Nuevas formas de violencia	10
2. Conclusiones	13
3. Referencias	16

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte con Énfasis en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Contacto: Reynellb@uninorte.edu.co

1. Introducción

El 21 de diciembre de 2017 el Cesar cumplió sus primeros 50 años de existencia como ente departamental, lo que lo convierte en el tercer departamento más joven de Colombia (solo seguido de Casanare y Guaviare). Antes de 1967, el actual territorio del Cesar pertenecía al otrora Magdalena Grande que, además, agrupaba al Magdalena contemporáneo y La Guajira. La extensión de este departamento es de 22.905 km², lo que equivale al 2 por ciento de la superficie total del país y al 15 por ciento del territorio de la región Caribe. Su población sobrepasa el millón de habitantes y en el 2017, su Producto Interno Bruto (PIB) correspondió al 1,8 por ciento del PIB nacional (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018).

A pesar de este modesto perfil económico, este departamento cuenta con una posición geoestratégica privilegiada dado que colinda con La Guajira, Magdalena, Bolívar, Santander y Norte de Santander y, además, limita con la República Bolivariana de Venezuela. Así, el Cesar es una zona de tránsito importante para alcanzar la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y las montañas que lo bordean (Arias Ortíz, 2010). A pesar de que la Gobernación del Cesar divide el territorio en cuatro subregiones esencialmente geográficas, para este apartado utilizaremos la clasificación que hace Arias Ortíz (2010). Para esta autora, el Cesar posee esencialmente tres subregiones que se organizan así:

1. El norte: Conformado por los municipios Becerril, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego, Valledupar, Bosconia, El Copey. Es la región económicamente más rica y posee la Sierra Nevada de Santa Marta (compartida con Magdalena y La Guajira) y la Serranía del Perijá.
2. El centro: Conformado por los municipios Astrea, El Paso, Chimichagua, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, y Tamalameque. Es una región con una geografía plana y regada por los ríos Cesar y Ariguaní. Gracias a eso, es la región más rica desde la óptica agrícola y ganadera.
3. El sur: Conformado por los municipios Aguachica, Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Martín, San Alberto y Tamalameque. Se relaciona con el Catatumbo (Norte de Santander) y con la subregión del Magdalena Medio. Marcada por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es la región que estudiaremos en este escrito. Estos 11 municipios conforman casi el 30 por ciento de la extensión total del departamento.



A pesar del enfoque territorial en el sur del departamento, en aras de rastrear las dinámicas de violencia y presencia de actores ilegales, es necesario, en ocasiones, extender el foco y tomar en consideración las 2 subregiones restantes y las conexiones que pueda haber entre ellas. En ese sentido, lo primero que haremos será reconstruir de manera sucinta la historia de violencia en el departamento y la llegada y consolidación de las organizaciones armadas ilegales que se asentaron en él para, a partir de ello, proceder a ofrecer una explicación del fenómeno y presentar el escenario contemporáneo en el sur del Cesar.

1.1. Antecedentes del conflicto armado: la violencia prevalente

Tal como LeGrand (1988) lo explica, la violencia en el departamento durante la primera mitad del Siglo XX obedece principalmente a pleitos por la posesión de tierra. Colonos-campesinos fueron engañados por terratenientes que, luego de permitirles ocupar grandes extensiones de tierra fértil en las riberas del río Magdalena, los despojaron de estas a través de argucias burocráticas, y soportados por la falta de control estatal, ya que existían insuficientes registros sobre terrenos baldíos y poco podía hacer el Estado para defender los levantamientos campesinos. Asimismo, estas élites económicas incipientes se encontraron con la connivencia de los latifun-

distas, comerciantes, ganaderos y cafeteros que en el futuro se convertirían –al igual que los primeros- en la élite política del departamento naciente (Gutiérrez, 2012).

Gracias al prestigio y poder del que se servían los hacendados, el uso de la violencia estatal como método de coacción contra los colonos-campesinos e indígenas rebeldes fue común, y con el paso del tiempo, esta práctica degeneró en la contratación de fuerzas privadas que despojaban y maltrataban a quien habitara terrenos apetecibles para los poderes económicos. A pesar de la desprotección a nivel local, las luchas agrarias encontraban eco en el escenario nacional dado el periodo de gobiernos liberales y la centralidad que adquirió este punto en el discurso de personajes como Alfonso López Pumarejo¹. Empero, la capacidad que tenía el Estado de influenciar la política local era poca y el estallido de la violencia bipartidista en 1948 condenó las reivindicaciones agrarias al ostracismo en la agenda pública (Gutiérrez, 2012).

Además, la década de 1950 significó mucho para el Cesar dado que es aquí cuando se inicia el cultivo extensivo de algodón impulsado por los altos precios internacionales del producto. La necesidad que tenían los terratenientes de extender sus cultivos y beneficiarse del escenario internacional profundizó las rencillas existentes y abrieron paso a manifestaciones con impacto regional y hasta nacional como el Paro Cívico del Nororiente en 1987 (Sánchez, 2008). Grandes organizaciones como la Iglesia Católica, el partido de gobierno, Fenalco y Fedegro calificaron el levantamiento como subversivo y extendieron la estigmatización contra los sindicatos y las luchas agrarias (Gutiérrez, 2003).

Tomando la conceptualización de Gutiérrez (2012), la violencia en el Cesar entonces tiene dos manifestaciones tempranas: una “ejercida desde arriba, protagonizada por los grandes propietarios” (p. 38) y otra “proyectada desde abajo por los campesinos y colonos” (p. 38). Como puede notarse, se trató de dos violencias asimétricas y fundadas en motivos diferenciados: mientras la primera contó con la complicidad de las fuerzas oficiales y el establecimiento local, la segunda no tuvo el amparo del oficialismo y siempre resultó débil y mermada. Es por eso que el autor afirma que la llegada de los grupos guerrilleros cuenta con un pretexto en la constante estigmatización y aniquilación de la protesta social. Asimismo, la alianza de las élites locales con los grupos paramilitares en el futuro no resulta una sorpresa dado el historial con el que cuentan estos poderes económicos que, como ya ha sido dicho, luego trasladarían su influencia a la política departamental².

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) comparte esta visión y considera que los grupos guerrilleros intentaron “intentaron capitalizar el descontento del movimiento campesino y el de los trabajadores de diferentes industrias” (p. 13) para expandir sus ideas revolucionarias a fin de establecerse en el Cesar, mien-

¹ Alfonso López Pumarejo fue presidente de Colombia durante dos periodos (1934-1938 y 1942-1945). Recordado, entre otras cosas, por impulsar una reforma agraria que, debido a la oposición de las clases adineradas del país –especialmente los terratenientes- no logró consolidarse (Mora Toscano, 2010).

² El ejemplo más claro resulta de la llamada “parapolítica” que afloró en el Cesar durante el apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para las elecciones del 2002, verbigracia, el Bloque Norte de la organización paramilitar sectorizó el Cesar en tres regiones: los municipios mineros fueron coaccionados para que apoyaran a Mauricio Pimiento, la región del sur vivió el mismo proceso a favor de Álvaro Araujo Castro y su fórmula a la Cámara de Representantes Miguel Ángel Durán, y el norte del departamento se mantuvo sin asignación y fue bautizada De cielos abiertos por la organización armada. Los grupos paramilitares no necesitaron inmiscuirse en la política como candidatos para controlar el poder regional, sino subordinar a la clase política (Acevedo Guerrero, 2010b).

tras que los grupos paramilitares recibieron el apoyo de figuras de la élite política y económica como Jorge Gnecco Cerchar -cuyo hermano, Lucas, fue dos veces gobernador del Cesar y Congresista de la República, y su otro hermano, José, Senador- y Hugues Manuel Rodríguez, uno de los más grandes hacendados del Cesar y heredero de un prominente imperio lechero.

En palabras de Barrera (2014), tanto los grupos guerrilleros como las organizaciones paramilitares encontraron en el Cesar una estructura de oportunidad en las “tensiones y conflictos que habían estallado en la región en la década de 1980” (p. 278) y la aprovecharon para expandir sus dominios hacia el departamento del Cesar.

1.2. La violencia guerrillera

En 1964 en Simacota (Santander), a pocos kilómetros del actual municipio de San Alberto al sur del Cesar, se conformó el ELN. Con el tiempo, las estructuras armadas se expandieron y asentaron en el Catatumbo, que, como ya ha sido aclarado, colinda con el sur del departamento del Cesar. Tanta sería la importancia del sur del Cesar para esta guerrilla que el primer frente que se consolida en el departamento es el Camilo Torres Restrepo, que actúa principalmente en municipios del sur como Aguachica, Gamarra, González, Pailitas, Pelaya, San Martín, Curumaní, Chiriguaná, Tamalameque y La Gloria durante la década de 1970 (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2012).

A partir de la presencia que lograron en el sur del departamento, esta guerrilla se expandió hasta municipios del centro y terminó formando en 1987 el frente 6 de Diciembre que, atraído por la explotación de las minas de carbón al norte del Cesar, se establece y llega a hacer presencia en la misma capital del departamento, Valledupar. Dos años después, es formado el frente José Manuel Martínez Quiroz, cuya influencia llegó a hacerse manifiesta en Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, La Jagua de Ibirico, y Chiriguaná. Al sur del departamento aparecen también estructuras armadas del ELN con menor capacidad armada, como el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en Aguachica y Pailitas (Barrera, 2014, Movice, 2014).

De esta forma, la presencia histórica del ELN en el sur del departamento le ha resultado funcional para poder extender su influencia en el departamento y, con el tiempo, alcanzar la misma capital. No obstante, desde 1980 el Cesar soportó la presencia de la otrora guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el frente 41 (Cacique Upar) en el centro, y estructuras mucho más pequeñas y menos influyentes como la compañía Marlon Ortíz y la columna móvil Marcos Suárez Castellanos. En adición, el frente 20 de la guerrilla, a pesar de que opera principalmente en Santander, hace presencia incipiente en algunos municipios del sur (como San Martín y San Alberto) sin que esto se traduzca en una presencia sostenida en la zona dada la hegemonía de la que históricamente ha gozado el ELN en esta parte del departamento (Movice, 2014). Barrera (2014) explica que la llegada de las FARC al Cesar responde al objetivo de adoptar una táctica más ofensiva que implicaba el desdoblamiento de algunos frentes y la expansión hacia nuevos territorios. Lo anterior definido en la séptima conferencia de la organización armada en 1982.

Según Acevedo (2010a), no es casualidad que la presencia de grupos guerrilleros en el Cesar se intensificara durante los años de las bonanzas marimbera y cocainera dado el carácter que tenía este departamento como corredor para las estructuras de contrabando (aunado a la tácita aceptación de la actividad entre los pobladores, quienes no consideraban el uso de trochas y estructuras de contrabando como un delito sino como parte de su cultura). Así, además de aprovecharse del incipiente mercado del narcotráfico, las guerrillas podían utilizar la frontera para abastecerse militarmente y con insumos necesarios para su supervivencia.

La presencia de los grupos guerrilleros en el departamento es evidenciada en las cifras de secuestros que entre 1992 y 1997 pusieron al municipio en el primer lugar nacional por número de secuestrados (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). Asimismo, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), el Cesar, con 2618 casos, es el tercer departamento que más secuestros evidenció entre 1970 y 2010, solamente superado por Antioquia y el Valle del Cauca. Contrastado con el número de habitantes, la tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes en el Cesar es de 12,4, y si lo reducimos a la subregión del sur del Cesar, esta aumenta a 18,1 siendo la más alta de todo el territorio nacional (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Asimismo, al detallar estos secuestros en razón de sus autores entre 1992 y el 2000, el ELN resulta el mayor responsable, tal como puede ser observado en el Cuadro N1. Esta tendencia es confirmada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) que ubica a Valledupar, Aguachica y Curumaní como el segundo, tercero y quinto municipio con mayor número de secuestros atribuidos a este actor armado.

Además de las FARC y el ELN, el Cesar presencié, con menor intensidad, el asentamiento del Ejército Popular de Liberación (EPL) a través del frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano (Fundación Ideas para la Paz, 2017), y la ocupación parcial de los frentes Claudia Isabel Escobar Jerez y Armando Cagua, ambos de la guerrilla del ELN. Estos últimos se asentaron principalmente en San Alberto, pero fueron opacados por los frentes Camilo Torres y Manuel Gustavo Chacón (Barrera, 2014, Movice, 2014).

Año	Delincuencia común	ELN	CNGS	FARC	EPL	Autodefensas
1992	59	32	4	0	3	0
1993	32	32	0	4	1	0
1994	31	46	0	1	1	0
1995	40	44	0	4	1	0
1996	103	61	0	18	2	0
1997	72	93	0	18	0	10
1998	58	115	0	22	5	4
1999	75	46	0	52	10	0
2000	104	151	0	20	5	16

Cuadro N 1: Secuestros en el Cesar 1992-2000 Fuente: PNUD a partir de datos de la Dijín y la Policía Nacional.

1.3. La irrupción del paramilitarismo

La amplia presencia guerrillera en el sur del departamento sometió a los terratenientes a continuas extorsiones y secuestros que sirvieron de pretexto para la contratación de grupos de vigilancia privada en aras de vigilar sus territorios, pero que con el tiempo participaron en el despojo de tierras y la expansión territorial de los latifundios (Gutiérrez, 2012, Movice, 2014). Este escenario explicaría la incursión de algunos personajes de la élite local en las filas paramilitares, como es el caso de Rodrigo Tovar Pupo.

Las primeras organizaciones paramilitares de la que se tiene registro en el departamento son las de los hermanos Prada (que luego serían conocidas como las Autodefensas del Sur de Cesar (AUSC) y, finalmente, pasaron a ser el frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de las AUC), las autodefensas de Chepe Barrera, que realmente hicieron mayor presencia en el Magdalena, y las Autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC) (Barrera, 2014, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2012).

Estas estuvieron, por las mismas dinámicas que las acercaron a la región, ligadas a las zonas ganaderas y palmicultoras. Así, se concentraron en los municipios Aguachica, Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Martín, San Alberto y Tamalameque, justamente los 11 que conforman el sur del departamento (Movice, 2014).

Esta confluencia de paramilitares y guerrillas en la subregión del sur no es fortuita dada su significancia para los cultivos ilícitos y la zona de tránsito que representa para alcanzar a Venezuela. Además, como ya ha sido afirmado, los circuitos de narcotráfico se conectan entre el centro y norte del departamento y la región del Catatumbo a través del sur del Cesar.

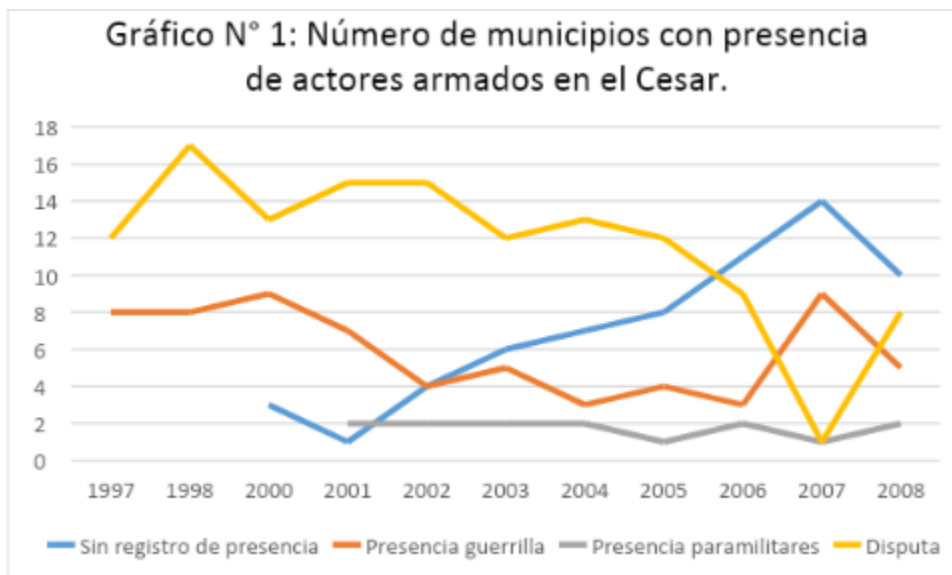
Estos grupos paramilitares se presentaron en primer lugar como organizadores de las mal llamadas limpiezas sociales, y resaltan casos como el de Aguachica, en el que el autodenominado Grupo Terminator sembró terror a través de mutilaciones y decapitaciones y, tan solo en 4 años (1986-1990), asesinaron a 1710 personas, desaparecieron 353 y torturaron a 351 (Molano, 2010).

Empero, con el tiempo fue claro que esta ofensiva violenta se dirigía también contra sindicalistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. En 1997, los hermanos Castaño deciden unificar los grupos de autodefensas del país y dan origen a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que unos años después cooptaría las AUSC (pasaron a ser el frente Héctor Julio Peinado) y establecería su hegemonía sobre el resto de organizaciones paramilitares a través del Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo³ alias Jorge 40 (Rutas del Conflicto, s. f.).

Las AUC llegaron a constituirse como la principal amenaza para el predominio del ELN y las FARC en el departamento. En el Gráfico N 1 puede observarse con mayor claridad cómo el número de municipios en disputa se mantuvo considerablemente alto desde la llegada de las AUC hasta su proceso de desmovilización. Si bien, entonces, no puede afirmarse que lograron desplazar a las guerrillas, al menos las mantuvieron replegadas y pusieron en jaque su hegemonía en los territorios en las que estas se habían asentado.

Barrera (2014) ofrece una tipología de los grupos paramilitares en el Cesar a partir de 1) su origen subregional y temporal, 2 su estructura organizativa y 3) su capacidad militar. Entonces, por un lado, tendríamos en el departamento a los grupos paramilitares que surgieron a finales de la década de 1980 con el objetivo de neutralizar el avance guerrillero en el sur y con la influencia del modelo paramilitar de Puerto Boyacá (AUSC, AUSAC), y por otro, al representado en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que luego serían conocidas como las AUC. Este último constituyó un grupo más organizado, cohesionado y autónomo, además de contar con combatientes entrenados y con experiencia (como exmilitares y exguerrilleros), lo cual explica su predominio hacia comienzos del nuevo milenio.

³Tovar Pupo nació y vivió su infancia en una zona pudiente de Valledupar, capital del Cesar. Es hijo de un exmilitar y tiene estudios castrenses inconclusos en la ciudad de Bogotá. Fue inspector de pesos y medidas durante la Alcaldía de Rodolfo Campo Soto y a mediados de los 90 ingresó a la ilegalidad a través del tráfico de armas para las AUC y, posteriormente, la comandancia del Bloque Norte de la organización. Fue extraditado a Estados Unidos en el 2008 (Verdad Abierta, 2008).



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En el sur del departamento también se establecería el frente Resistencia Motilona, adscrito al Bloque Norte de las AUC, con una fuerte presencia en los municipios Aguachica, Chimichagua, Chiriguaná, Gamarra, La Gloria, Curumaní, y Pailitas. Este frente es responsable, entre otras, de la Masacre de Curumaní, la Masacre de Lomas Verdes y Nuevo Horizonte, y una masacre cometida en la zona rural de Pailitas⁴, lo que da cuenta de su amplia injerencia en los asuntos del sur del departamento.

Asimismo, este frente resulta relevante porque llegó a contar con 600 hombres entre sus filas y es el responsable de una gran cantidad de despojos de tierras y desplazamientos forzosos. En el 2001, por ejemplo, fueron desplazadas 1.645 personas en Pailitas, 1.161 en Chiriguaná y 1.363 en Curumaní, justo en el tiempo en el que el frente Resistencia Motilona se expandía por estos municipios (Verdad Abierta, 2011). El líder de este frente fue Jeferson Enrique Martínez López alias ‘Omega’⁵, hombre cercano a Rodrigo Tovar Pupo.

El frente Resistencia Molina, además, fue un importante músculo financiero para el Bloque Norte, ya que a través del cobro de “vacunas”⁶, el contrabando de

⁴La Masacre de Curumaní fue perpetrada el 25 de julio de 1999. El grupo paramilitar instaló un retén ilegal en la zona rural de Curumaní y retuvo a 12 personas, de las cuales cinco fueron asesinadas al comprobar que estaban en una de sus listas que los acusaban de guerrilleros (Rutas del conflicto, s. f.). La Masacre de Lomas Verdes y Nuevo Horizonte tuvo lugar entre el 4 y 6 de diciembre de 2005. Cerca de 200 hombres ingresaron a las veredas Lomas Verdes y Nuevo Horizonte y retuvieron a 45 personas, de las cuales 9 fueron asesinadas por órdenes de Rodrigo Tovar Pupo (Rutas del conflicto, s. f.). La otra masacre a la que se hace referencia fue cometida entre el 30 de agosto y 6 de septiembre del 2004 en las poblaciones de Bobalí, Quebrada Chiquita, Guarumeras y Villa Nueva, jurisdicción del municipio de Pailitas. Además de asesinar a 3 campesinos y desaparecer a otro, el frente Resistencia Motilona se apoderó de los animales y los productos agrícolas de sus víctimas y destruyeron múltiples propiedades (El Heraldo, 2011).

⁵Martínez López era el “hombre de confianza” de Tovar Pupo en El Cesar. A través de su bloque, logró consolidar una fuerte estructura armada desde Aguachica hasta el norte del Cesar. Según Verdad Abierta (2008) cualquier decisión que tomaban las AUC en el Cesar pasaba por su campamento en Pailitas. Murió asesinado en noviembre del 2006.

⁶Cuotas ilegales que las AUC cobraban a negocios lícitos e ilícitos y cuyo incumplimiento ocasionaba

gasolina, el robo de fincas, y los impuestos al narcotráfico (por kilo de coca o mancha de amapola que pasara del Catatumbo al Cesar) respaldaron la empresa paramilitar. Así también el paramilitarismo logró cooptar la fuerza pública y a través de dinero e infiltraciones obtener información para planear sus asesinatos y proteger el narcotráfico (Verdad Abierta, 2011). Asimismo, los exparamilitares Jovannis Manuel Lobo alias 'Bachiller', Wilson Poveda Castaño alias 'Rafa' y Jaime Luis Granados alias 'Chacal', en su versión libre a la Unidad de Justicia y Paz afirmaron haber influenciado las elecciones en el sur del Cesar en aras de controlar la contratación de los municipios.

De esta forma, el fenómeno paramilitar, aunque mantiene en su origen en el sur del Cesar un claro carácter antisubversivo, luego se constituye más como una empresa criminal que, con la complicidad y colaboración de las élites locales, lograron transgredir el orden político, hacerse con un dominio inusitado de las relaciones económicas legales e ilegales, y sembrar el terror entre los pobladores del departamento en aras de sostener su influencia. A pesar de que las AUC fueron la organización paramilitar predominante y más poderosa en el sur del Cesar desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta su desmovilización producto del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no fueron el único grupo de autodefensas que funcionó en esta región⁷. Por el contrario, gran parte de su predominio obedece a la capacidad que tuvieron para absorber estos grupos armados y nutrirse de sus estructuras.

1.4. Nuevas formas de violencia

La desmovilización del Bloque Norte de las AUC significó para muchos municipios la reducción de ciertos crímenes. Por ejemplo, mientras que, en el 2000 -año importante en la consolidación de esta organización armada en el Cesar- se documentaron 19 masacres, en el 2006, año en el que finaliza el proceso de desmovilización en el departamento, no hubo ninguna. Asimismo, los secuestros tuvieron una reducción significativa y el desplazamiento forzado se redujo casi a la mitad entre el 2003 y el 2006 (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humano, 2012). Asimismo, como se puede observar en la Gráfica N 2, entre el 2003 y el 2017 hubo una reducción de aproximadamente el 67 % de los asesinatos en el departamento. La rápida caída hacia el 2006 responde a las dinámicas de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC, y el repunte posterior a la incursión de Grupos Armados Organizados (GAO).

No obstante, si focalizamos los datos de asesinatos en los 11 municipios del sur del Cesar, observamos una dinámica particular: mientras que en el 2003 (año de mayor violencia en el departamento) el sur concentraba apenas el 13 % de los homicidios del departamento, en el 2009, cuando las AUC ya se habían desmovilizado, esta cifra correspondía al 42 % y en el 2017 las muertes violentas en el sur representaron el 29 % del total.

Sobre esto, vale la pena hacer algunas acotaciones. Por un lado, el aumento

agresiones físicas o hasta la muerte de la víctima.

⁷Además de las AUC, en el Cesar hubo presencia de las Autodefensas de los hermanos Prada y de Chepe Barrera, y las Autodefensas de Santander y Sur de Cesar (AUSAC) (Movice, 2014, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2012).

constante de asesinatos entre el 2003 y el 2006 obedece a las dinámicas de confrontación entre las AUC, los grupos de autodefensas que se negaban a abrir paso al nuevo actor paramilitar, y las guerrillas (principalmente el ELN) dado que en los municipios del sur la presencia del ELN ha sido constante desde la década de 1980, por lo que la incursión paramilitar originó disputas territoriales que exacerbaban la violencia. Asimismo, es necesario también poner de manifiesto que el escarpado nivel de violencia que vivió el Cesar durante estos años puede explicar las cifras muy bajas durante los primeros años de la medición.

Por otro lado, a pesar de que hay diferencias radicales en los porcentajes de asesinatos que se presentaron en el sur del departamento entre el 2003 y el 2009, al contrastar esto con la cifra absoluta de muertes se puede observar en esta región realmente no ha habido variaciones importantes del número de homicidios. Las grandes variaciones responden más a la disminución constante de la violencia en el departamento que a la modificación de la misma en esta subregión. Así, por ejemplo, a pesar de que entre el 2008 y el 2009 hay un aumento de 7 puntos en el porcentaje de asesinatos que se presentaron en el sur con respecto a todo el departamento, al observar la variación en el número de homicidios, es de resaltar que en el 2009 se presentaron dos asesinatos menos en el sur que en el 2008. Esto podría significar una señal de alerta para las políticas de pacificación que se han implementado en el departamento, ya que a pesar del indiscutible éxito que han tenido con respecto al total del Cesar, no han logrado disminuir sustancialmente la violencia en el sur.



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de la Policía Nacional y Medicina Legal⁸

⁸Las cifras de los años 2003-2009 fueron obtenidas a partir de información de Medicina Legal dado que no existe registro de la Policía Nacional.



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de la Policía Nacional y Medicina Legal.

Como ya ha sido esbozado, la desmovilización del Bloque Norte de las AUC solo relajó las condiciones de violencia en el sur del departamento de manera temporal, ya que a partir del 2007 aparecieron organizaciones delictivas asociadas al narcotráfico que buscaron la continuación de las estructuras criminales del paramilitarismo. En la mayoría de casos no se trató de organizaciones totalmente novedosas, ya que desmovilizados de las AUC se enfilaron en ellas y transmitieron las técnicas y las rutas de narcotráfico que otrora controlaba el Bloque Norte (Verdad Abierta, 2009).

En principio, estas bandas se identificaron como Águilas Negras o Nuevas Autodefensas de Colombia-Cesar en panfletos reivindicando las mal llamadas limpiezas sociales que años antes eran parte del modus operandi de los AUC y, además, se afirmó que “controlaban las redes sicariales y regulaban el negocio del paga diario” (Barrera, 2014, p. 317). Con el tiempo, el pretexto contrainsurgente fue cada vez menos visible y se hizo evidente que la presencia de narcotraficantes, excombatientes del bloque Norte, bloque Central Bolívar y delincuentes en estos grupos armados respondía más a la necesidad de mantener e incrementar el dominio sobre los corredores de movilidad entre piedemonte y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la retoma de territorios y sectores poblacionales estratégicos para la expansión de los negocios ilegales (Comité Departamental de Atención Integral al Desplazamiento Forzado, 2011).

Según el Comité Departamental de Atención Integral al Desplazamiento Forzado, en adelante CPAIPD, (2011), a pesar de que para el 2008 los combates entre la fuerza pública y el Ejército disminuyeron considerablemente, la violencia no disminuyó debido a la incursión de GAOs tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -cuyo fundador, Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, era un reconocido excombatiente paramilitar- y los Rastrojos. Estas dos organizaciones criminales tuvieron su mayor momento de conflictividad en el sur del Cesar durante

el 2009, año en el que Rendón Herrera es arrestado y Los Rastrojos aprovechan para reorganizarse en Aguachica, La Gloria, Tamalameque y Gamarra a fin de controlar las rutas de comercialización de la coca y contener a las AGC (Barrera, 2014).

La influencia de las AGC (también conocidas como Clan del Golfo, y en el pasado como “Los Urabeños”) en el Cesar ha resultado importante durante la última década, y se evidencia, verbigracia, en la caleta de explosivos y municiones hallada en el 2017 en Chimichagua y la captura de integrantes de la organización en algunos municipios del Cesar (Barrios, 2017). No obstante, debido a la necesidad de aprovechar los corredores entre el Magdalena y La Guajira, esta organización ha afectado más el centro y norte del departamento que los municipios del sur (Verdad Abierta, 2009).

Por último, es imperioso manifestar que el sur del Cesar actualmente se encuentra afectado por la presencia del ELN y la presión que esta guerrilla ejerce para agilizar las conversaciones de paz que sostiene con el Estado colombiano. La confrontación armada en la región Caribe prácticamente desapareció en el 2012, por lo que las nuevas dinámicas de violencia están más ligadas “a la predación de rentas legales (extorsión) y el control de rentas ilegales” (Trejos Rosero, 2018, p. 1).

Lo anterior se encuentra de manifiesto en acciones como el secuestro de una avioneta de valores en enero del 2018 en Aguachica, y, tal como lo manifiesta el Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado de UNCaribe–Universidad del Norte (2018a), el hecho de que de 6 acciones cometidas por el ELN durante su paro armado en la región Caribe (10-13 de febrero de 2018), 5 hayan sido sostenidas en municipios del sur del Cesar.

También resulta relevante mencionar que, de 7 municipios del departamento con presencia activa del ELN, 6 se encuentran en el sur (UNCaribe, 2018b). Cabe resaltar que en el sur del departamento coinciden los tres municipios con presencia de cultivos ilícitos: González, San Alberto y San Martín (UNCaribe, 2018c).

2. Conclusiones

A pesar de que el departamento del Cesar cuenta con apenas 50 años de historia y un modesto perfil socioeconómico, su población ha sido testigo de la confrontación armada desde hace varias décadas: en principio se trató de pugnas esencialmente agrarias que, si bien no implicaron grupos armados altamente organizados, sí sembraron las semillas de discordia que luego serían utilizadas por las guerrillas desde la década de 1980 como pretexto para incursionar en el Cesar y obtener el apoyo de comunidades rurales y campesinas. La misma presencia de las guerrillas del ELN, las FARC y, en menor medida, el M-19 y el EPL, motivaron la aparición de grupos de autodefensas en aras de defenderse de la extorsión y el secuestro propagado por los insurgentes. No obstante, con el tiempo el discurso antisubversivo cayó en desuso y estos grupos aprovecharon su estructura para despojar campesinos de sus tierras y sembrar el terror en la población. A finales de la década de 1990, se conformó el Bloque Norte de las AUC, que en pocos años sometió a todas las organizaciones antisubversivas del departamento y originó a través de las disputas con estas y las guerrillas el periodo más violento del Cesar. A partir de la desmovi-

lización de las AUC (2006) la violencia en el departamento ha reaparecido a través de Grupos Armados Organizados liderados y conformados por excombatientes de las AUC que pretenden reactivar el dominio de las actividades ilegales en el centro y norte del departamento. En el sur, empero, el ELN se mantiene como el actor predominante y dedica sus esfuerzos al control de rentas legales e ilegales más que la confrontación directa con las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Organización armada	Frente/Bloque	Periodo	Municipios
FARC	Frente 19 José Prudencio Padilla	1988 - 2016	Pueblo Bello
			Valledupar
			Bosconia
			Valledupar
			Pueblo Bello
			El Copey
			San Diego
			Manaure
			La Paz
			Bosconia
			Becerril
			Codazzi
			Chiriguaná
	Frente 41: Cacique Upar	1990-2016	El Paso
			Curumaní
			Chiriguaná
			El Paso
			Curumaní
			Astrea
			Chimichagua
			Pailitas
	Frente 37	1987-2016	Tamalameque

ELN	Frente Camilo Torres	Mediados de la década de 1970 - presente	Curumaní
			Aguachica
			Río de Oro
			San Alberto
			Gamarra
			González
			Pailitas
			Pelaya
			San Martín
	Frente 6 de Diciembre	1987 - mediados del nuevo milenio (se fusionó con el Frente Gustavo Palmesano Ojeda).	Manaure
			La Paz
			San Diego
			Codazzi
			La Jagua de Ibirico
			Chiriguaná
			Pueblo Bello
			Valledupar
			Bosconia
	Frente José Manuel Martínez Quiroz	1989 - presente	Chiriguaná
			Manaure
			La Paz
			San Diego
			Codazzi
AUSC		1992 - 2004 (se convirtió en el frente Héctor Julio Peinado de las AUC).	La Jagua de Ibirico
			Aguachica
			San Martín
			Gamarra
			San Alberto
			Río de Oro

AUC	Frente Resistencia Motilona	1996 - 2006	Tamalameque
			Aguachica
			La Gloria
			Pelaya
			Pailitas
			Curumaní
			Becerril
			Codazzi
	Frente Juan Andrés Álvarez	1998 - 2006	Chiriguaná
			El Paso
			Bosconia
			El Copey
			La Jagua de Ibirico
			Becerril
	Frente Mártires del Valle de Upar	2000 - 2006	Codazzi
			Pueblo Bello
			Valledupar
			Aguachica
	Frente Héctor Julio Peinado	2004 - 2006	San Martín
			Gamarra
			San Alberto
			Río de Oro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en Barrera (2014), Movicé (2014), Verdad Abierta (2008b) y Trejos Rosero (2016).

3. Referencias

Acevedo Guerrero, T. (2010a). Estructuras de poder político y electoral (pp. 33-53). Bogotá: Claudia López Hernández.

Acevedo Guerrero, T. (2010b). Hipótesis de captura del Estado (pp. 54-76). Bogotá: Claudia López Hernández.

Arias Ortiz, A. (2010). Contexto de violencia y conflicto armado (pp. 2-32). Bogotá: Claudia López Hernández.

Barrera, V. (2014). Las vicisitudes de la integración: Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar. En F. González G., D. Quiroga, T. Ospina-Posse, A. Aponte G., V. Barrera E. Porras M., Territorio y Conflicto en la Costa Caribe (1st ed., pp. 227-330). Bogotá: Fernán E. González G.

Barrios, M. (2017). Descubren caleta con armas del Clan del Golfo en Cesar. El Heraldó. Recuperado a partir de <https://www.elheraldo.co/judicial/descubren-caleta-con-armas-del-clan-del-golfo-en-cesar-366895>

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). Una verdad secuestrada:

cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-2010. Bogotá: Imprenta Nacional, 20 de junio de 2013.

El Heraldo. (2011). 40 años de cárcel por masacre de campesinos. Recuperado a partir de <https://www.elheraldo.co/judicial/40-anos-de-carcel-por-masacre-de-campesinos>

Gutiérrez, O. (2003). El auge social y político del paramilitarismo en el sur de Bolívar. Tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Gutiérrez, O. (2012). Conflictos sociales y violencia en el departamento del Cesar, Colombia. *Revista Colombiana De Sociología*, 35(1), 17-39.

LeGrand, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1st ed.). Bogotá: Centro Editorial, Universidad Nacional de Colombia.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2018). Perfil Económico: Departamento del Cesar. Valledupar.

Molano Bravo, Alfredo, En Medio del Magdalena Medio, Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, Bogotá 2010.

Mora Toscano, O. (2010). Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo: estado y reformas económicas y sociales en Colombia (1934-1938, 1942-1945). *Revista Apuntes del CENES*, 50 (29), 151-171. Movice. (2014). El sur del Cesar: entre la acumulación de tierra y el monocultivo de palma. Informe Zona V.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos. (2012). Observatorio del Programa Presidencial de DDHH Y DIH: Diagnóstico departamental Cesar. Bogotá.

Comité Departamental de Atención Integral al Desplazamiento Forzado. (2011). Política pública de prevención y atención al desplazamiento Forzado. Valledupar.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). Cesar: Análisis de la conflictividad. Bogotá: Alessandro Preti.

Rutas del Conflicto. [Rutasdelconflicto.com](http://rutasdelconflicto.com). Recuperado 27 marzo 2018, a partir de <http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=82>

Rutas del Conflicto. [Rutasdelconflicto.com](http://rutasdelconflicto.com). Recuperado 27 de marzo 2018, a partir de <http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=83>

Sánchez, A. (2008). Líbranos del bien. Bogotá: Alfaguara.

Trejos Rosero, L. (2016). Hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la insurgencia armada en el Caribe colombiano: los casos de las FARC-EP y el ELN. *Revista De Derecho Uninorte*, (45), 346-377. doi:10.14482/dere.45.7982

Trejos Rosero, L. (2018). Riesgo electoral asociado a la presencia de actores armados y rentas ilegales en el Caribe colombiano: “Entre la herencia paramilitar y la marginalidad insurgente” (p. 1). Barranquilla: UNCaribe. Recuperado a partir de

<https://bit.ly/2uGnQIY>

UNCaribe. (2018a). Acciones del ELN durante paro armado. Barranquilla. Recuperado a partir de <https://bit.ly/2GGjO97>

UNCaribe. (2018b). Presencia de actores armados en el Caribe colombiano. Barranquilla. Recuperado a partir de <https://bit.ly/2Eb6ap8>

UNCaribe. (2018c). Presencia de rentas ilegales en el Caribe colombiano. Barranquilla. Recuperado a partir de <https://bit.ly/2pUrZ89>

Verdad Abierta. (2008a). 'Jorge 40', Rodrigo Tovar Pupo. Recuperado a partir de <https://verdadabierta.com/perfil-rodrigo-tovar-pupo-alias-jorge-40/>

Verdad Abierta. (2008b). 'Omega', Enrique López. Recuperado a partir de <https://verdadabierta.com/perfil-enrique-lopez-alias-omega/>

Verdad Abierta. (2009). La guerra entre 'los Paisas' y 'Don Mario' por el control de La Guajira. Recuperado a partir de <https://verdadabierta.com/i quien-controla-la-guajira/>

Verdad Abierta. (2011). El 'patio' de 'Jorge 40'. Recuperado a partir de <https://verdadabierta.com/el-patio-de-jorge-40/>